

El principio de vertebración en el 'daño a la salud' en Colombia

Sobre el "daño a la salud", la Sección Tercera del Consejo de Estado emitió su opinión en un estudio denominado *Documento final*, aprobado mediante acta del 28 de agosto del 2014, referente a la reparación de perjuicios inmateriales, con el fin de recopilar la línea jurisprudencial y establecer criterios unificados para la reparación de los perjuicios. Estos fines, si bien como un intento académico son válidos, no se cumplen, lo que ha suscitado críticas en su concepto, definición, interpretación, aplicación e interrelación con el Estado y se ha entrado en conflicto con la Constitución.

En tal sentido, quiero destacar los siguientes tres escritos sobre el tema: *El daño inmaterial en la responsabilidad extracontractual del Estado: un reconocimiento incompleto*, de Javier Andrés Perozo Hernández, en el libro *Aspectos especiales de la responsabilidad civil*

y del Estado. Una visión moderna; el artículo *Crítica a la doctrina y jurisprudencia del daño a la salud en Colombia*, en la revista digital de Derecho Administrativo (Ed. 11ª, de la Universidad Externado de Colombia, 2014), de los maestros Erick Valdés y Laura Puentes, y el libro *La reparación del daño como mecanismo de tutela de la persona*, de Milagros Koteich.

Estos son estudios bien fundamentados sobre el daño a la salud en Colombia a nivel de doctrina y jurisprudencia, nacional y foránea, en especial de Francia e Italia, con opiniones muy importantes que ameritan su lectura.

Sin embargo, en mi concepto, dejan de lado lo básico. La división de los perjuicios y/o daños a las personas siempre ha estado en dos grandes grupos: daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales, división ancestral hecha sin reparos o cuestionamientos, en la cual se ha estructurado la doctrina y se ha construido la jurisprudencia desde el Derecho Romano y todos los doctrinantes clásicos (Adriano De Cupis) y actuales, como los citados, y nuestros maestros: Gilberto Martínez Rave, Javier Tamayo Jaramillo y Juan Carlos Henao Pérez, entre otros.

División tradicional cuyo

axioma es que "todo daño que no tenga cabida en el daño patrimonial es extrapatrimonial", o sea, inmaterial, para seguir con la denominación que la jurisprudencia nacional incluye por excelencia: el daño moral. Este es un grupo abierto, dado que aquí tienen cabida todos los daños habidos y por haber que no sean patrimoniales, respetando las distintas garantías fundamentales y principios constitucionales tales como la seguridad jurídica, el de no causar daño (*alterum non laedere*), con su correlativo derecho a ser indemnizado o re-

"... desconocer el principio de vertebración sería violatorio de esta ley y, de contera, de la Constitución".

parado integralmente. El fin principal es la construcción de una sociedad garantista, dignificante, antropocéntrica, cimentados en el concepto de justicia e igualdad.

Esta estructura es entendible y comprensible y, si bien limita a dos categorías los daños patrimoniales (daño emergente y lucro cesante), deja abierta las categorías de daños inmateriales que no tienen cabida en los patrimoniales.

Con la nueva concepción del "daño a la salud", se genera confusión y nos deja perplejos, al cambiarnos lo básico, es decir, la



clasificación bipartita expuesta.

Es lógico y consecuente que se entienda que el daño a la salud reemplaza el daño a la alteración a las condiciones de existencia, que, a su vez, reemplazó el daño a la vida de relación (perjuicio de agrado), y este, a su turno, reemplazó el daño fisiológico, siendo pacífica la doctrina a estas denominaciones que en concreto indemnizan un mismo daño cambiándole su entorno, mas no su esencia.

Pero es ilógico e inconsecuente que se pretenda reemplazar el daño estético, el daño sexual y el daño a las lesiones físicas o muerte de la persona, daños autónomos, al considerarlos de manera individual en su manifestación, intensidad, reconocimiento, indemnización y cuantificación (su *quantum*); agudizando la confusión (ya de por sí tensa), al limitar a tres componentes el grupo de daños inmateriales: el daño moral, el daño a la salud y daños a los bienes constitu-

cionales y convencionales (esta limitación, en mi concepto, es inconcebible).

Este principio de vertebración, es decir, de discriminar los rubros indemnizatorios, es una exigencia del Código General del Proceso, en el cual se precisa que el juramento estimatorio debe presentarse "discriminando cada uno de sus conceptos" (arts. 82, num. 7º; 90, num. 6º; 96, num. 3º; 283 y 284) para cuando se demanda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, eventos en los cuales lo reclamado se estima razonablemente en dinero en la demanda o petición correspondiente.

Por lo tanto, desconocer el principio de vertebración sería violatorio de esta ley y, de contera, de la Constitución.

JORGE PANTOJA BRAVO

Economista y perito financiero
jorpan2@yahoo.com

La protección de documentos...

►► PÁG. 14

documentos, el Gobierno australiano, de común acuerdo con Timor, le solicitó a la Corte que modificara su decisión en el sentido de autorizar la movilización de los documentos con el objetivo de devolvérselos a *Collaery Lawyers*. El 22 de abril del 2015, la CIJ autorizó que se levantara el sello impuesto para mantener la reserva sobre los documentos y Australia procedió a devolverlos, el pasado 12 de mayo.

Como consecuencia de lo anterior, el 2 de junio, el agente de Timor presentó ante la Corte la solicitud de desistimiento del caso por considerar que con la devolución había logrado sus

pretensiones: en primer lugar, la devolución física de los documentos y, en segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, consideran que Australia había reconocido, de forma implícita, que su actuación había violado los derechos soberanos de Timor. Por esta razón, la Corte retiró este diferendo de su lista de casos pendientes.

Lo importante del presente caso es el reconocimiento que se le da a la protección de los documentos que maneja una persona privada de los documentos públicos de terceros Estados, en el sentido de identificar una agresión contra una persona privada como una agresión a la soberanía del Estado que lo ha contratado.

Ética y disciplina

►► PÁG. 14

lado, debemos comenzar. La Corte Constitucional, al reformar su reglamento con ocasión del "caso Pretelet", decidió atribuir a la Sala Plena la función de adoptar un estatuto de ética, que en 24 años de funciones no había tenido. Cuesta imaginar el momento políticamente oportuno para que la Corte ejecute su propio reglamento y adopte dicho estatuto, aunque sea incorporando sin modificaciones el Código Modelo o los mencionados principios. Lo propio cabría esperar de los otros altos tribunales, pero en ellos el apremio de los medios de comunicación es menor.

Ciertamente, hay en nuestro país cientos de jueces que actúan de manera correcta. Pero un código de ética no es un estatuto disciplinario y les sirve aun a aquellos "jueces buenos": es un instrumento para acercar al funcionario al ideal del mejor juez posible, no solo a partir de los deberes propiamente jurídicos de los miembros del poder judicial, sino también de la aceptación de las razones morales que subyacen a dichos deberes. Es, en otras palabras, un instrumento para buscar lo que la exposición de motivos del Código Modelo denomina "el compromiso íntimo del juez con la excelencia y el rechazo a la mediocridad". ¿Para cuándo?



Tu aliado estratégico en procesos de formación y actualización

COMO CONSEGUIR NUEVOS CLIENTES... CLAVES PARA UNA EFECTIVA PROSPECCIÓN

Cali 8 de julio Bogotá 16 de julio

TALLER: SERVIR PARA COMPETIR

Bogotá 9 de julio

NÓMINA, PILA Y CONTABILIDAD ASPECTOS PRÁCTICOS PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA UGPP

Tunja 10 de julio Villavicencio 17 de julio

COMUNICACIÓN CON PROPÓSITO PARA POTENCIAR SU GESTIÓN

Cali 9 de julio Bogotá, 16 de julio

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS DEL LIBRO FISCAL, LA CONTABILIDAD TRIBUTARIA Y LAS NORMAS FISCALES INCLUIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Bogotá, 16 de julio

JORNADAS DE TRABAJO - EVITE SANCIONES Y VALIDE LA LEGALIDAD DE SUS ESQUEMAS DE TURNOS LABORALES

Pereira 16 de julio

DECLARACIÓN DE RENTA PERSONA NATURAL AÑO GRAVABLE 2014

Bogotá 15 de julio Medellín 16 de julio
Cali 22 de julio Baranquilla 24 de julio
Pereira 28 de julio

DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO (DECRETO 1072 DE 2015).

Bogotá 23 de julio Cali 13 de agosto
Medellín 20 de agosto
Baranquilla 27 de agosto

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SÍ MISMO EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ORGANIZACIONES

Bogotá 28 de julio

CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

Cali 30 y 31 de julio

NUEVAS MEDIDAS ANTICONTRABANDO 2015

Bogotá 20 de Agosto

DIPLOMADO EN GESTIÓN LEGAL Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO - SEGUNDA PROMOCIÓN 2015

Bogotá 14 de Agosto al 4 de Diciembre

FORMACIÓN PARA ASPIRANTES A NOTARIOS

Bogotá 14 de Agosto al 19 de Septiembre

X ENCUENTRO INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Bogotá, 27 y 28 de agosto

Conocimiento experto

CONSULTE MÁS EN
www.aplegis.com

Bogotá 425 5322 • Línea Nacional 01 8000 511144
Fax: 410 3554 ext.: 1670 • E-mail: ap@legis.com.co

LEGIS
INFORMACIÓN & SOLUCIONES